



JOAQUÍN ESTEFANÍA (Madrid, 1951) es licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en el diario "Informaciones", la revista "Cuadernos para el Diálogo" y el diario económico "Cinco Días" antes de incorporarse a "El País", en el que ha ocupado diferentes cargos, entre los que se encuentra el de director. Autor prolífico ha escrito entre otros libros "La nueva economía" (1995), "Contra el pensamiento único" (1998), y "El poder en el mundo" (2000). Su último libro es "La mano invisible". En este artículo fundamenta los aspectos beneficiosos que para España ha tenido, económicamente hablando, la llegada de la inmigración.

El (incorrecto) análisis coste-beneficio

A finales de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzaba los datos del padrón municipal con datos de uno de enero de 2006. Según el mismo, en esa fecha había en España 44,39 millones de personas, de los cuales el número de extranjeros era de 3,88 millones, lo que suponía el 8,7% de la población total. En este caso, el INE hacía una advertencia: como consecuencia de una modificación legislativa, en estas cifras no se han contabilizado a 492.952 extranjeros, que no han renovado su inscripción patronal por alguna de las siguientes causas: pueden haber salido de España durante los últimos años, puede que no hayan renovado su presencia en el padrón por falta de información sobre la obligación legal de hacerlo, e incluso pudieran haberse inscrito indebidamente sin estar en el país. La advertencia permite deducir que el número de extranjeros presentes en España es distinto (seguramente superior) a ese 8,7% de la población total. Como se sabe, por el hecho de estar empadronado, un ciudadano, sea del origen que sea, tiene derecho a la cartilla sanitaria y a la educación obligatoria.

Como la inmigración en España es un fenómeno inesperado, rápido e intenso desde el año 2000, no abundan los estudios sobre un balance coste-beneficio de su presencia en nuestro país. Pero ya hay algunos. Según un reciente informe publicado por Caixa Catalunya, sin los más de tres millones de inmigrantes que residen en España (no contempla todavía a la totalidad incluida en el último padrón), el PIB per cápita habría retrocedido un 1% en la última década; en cambio, España ha sido el país europeo en el que más ha aumentado este indicador, tras Irlanda y Grecia, con un crecimiento acumulado anual del 3,6%, frente al 2,2% de la media europea. Además, de todos los trabajadores extranjeros que contempla el estudio, casi 2,5 millones eran activos en términos laborales, con una tasa de actividad superior a la de los españoles (75,9% frente al 54,9%), lo que refuerza su contribución a la generación de la riqueza.

Por el contrario, otro estudio elaborado por el Instituto L. Klein, de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado Impacto económico de la inmigración en la Comunidad de Madrid, hace la siguiente cuenta: cada inmigrante paga una media anual de 1.468 euros en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, pero sus gastos en servicios sociales, sanidad y educación ascienden a 2.097 euros anuales. Por lo tanto, cada extranjero genera un saldo negativo para la Comunidad de Madrid de 629 euros.

Ya sé que ambos estudios no son homogéneos y que de ellos no se pueden sacar conclusiones generales. Pero sirven como tendencia a corto plazo. Sin embargo, un verdadero análisis coste-beneficio de la aportación de los inmigrantes debe incluir otros criterios de largo plazo (por ejemplo, su efecto sobre las pensiones públicas) y otras valoraciones más intangibles, pero igual de significativas.